

Cuadernos del Sur

AÑO 10 N° 18

Diciembre de 1994

Tierra
del  fuego

PLAN CAVALLO: REESTRUCTURACION CAPITALISTA Y COYUNTURA.

Anibal Mayo (*)

El plan de convertibilidad de abril de 1991 debe ser analizado en una doble perspectiva. Por un lado, el ajuste de las cuentas fiscales y el anclaje de la emisión monetaria al respaldo del dólar posibilitaron que el capitalismo argentino saliera de la hiperinflación ocurrida en los últimos meses del gobierno de Alfonsín.

Por el otro, esta salida de la crisis estuvo apoyada en un conjunto de cambios estructurales impulsados por el ministro Domingo Cavallo (aunque algunos de ellos ya habían sido instrumentados en 1989 y 1990) que consolidaron el modelo social y económico excluyente que rige en el país desde 1976. Tanto el ingreso al Plan Brady, como la apertura arancelaria, las desregulaciones y la privatización de las empresas públicas constituyeron transformaciones de suma importancia para el proyecto de establecer un modelo de acumulación plenamente integrado en la economía mundial. La profundidad de estas modificaciones, las cuales venían siendo reclamadas por el FMI y el Banco Mundial desde hacía una década, y el ímpetu con que el presidente Carlos Menem las llevó adelante determinaron que el Plan Cavallo se haya convertido hoy en el programa del bloque dominante industrial-bancario-terrateniente (1).

Este nuevo «proyecto de modernización» capitalista representa una verdadera ofensiva del capital sobre el nivel de vida de los trabajadores. Las propias estadísticas oficiales dan cuenta del nivel mínimo del salario real registrado entre 1991 y 1994 (equiparable, sin contar el pico hiperinflacionario, a los valores más bajos de la época de Martínez de Hoz) y de cifras de desocupación y subocupación sin precedentes en la Argentina. Asimismo, la perduración del ajuste provocó un incremento de los índices de la pobreza (1994) y el agravamiento de la crisis de las economías regionales, que desató los levantamientos populares de Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy.

Además de las condiciones internacionales muy favorables de comienzos de la década del noventa, el avance del plan Cavallo sólo puede comprenderse por la dispersión y la desmovilización de los trabajadores -en particular, del proleta-

(*) El autor agradece comentarios de Miguel Khavisse y de Eduardo Lucita.

riado industrial del Gran Buenos Aires-, golpeados por una década de ajustes del FMI y por el temor a la vuelta de la hiperinflación (2). Precisamente, la debilidad de la protesta social junto a la caída de la inflación y al ciclo expansivo del producto iniciado en 1991 constituyen los pilares que apuntalan al programa dominante, explican su aceptación por toda la oposición burguesa (UCR y Frente Grande) y que alientan al presidente Menem a intentar su reelección en 1995.

En 1994, las contradicciones siempre latentes de la convertibilidad se manifestaron con mayor crudeza. El programa actual arrancó con un tipo de cambio muy bajo (un peso-un dólar) que motorizó un auge de importaciones y un déficit de balanza comercial cuyo valor en 1994 ronda los 6.500 millones de dólares. Si se añaden los servicios reales y financieros, resulta un desequilibrio de cuenta corriente de 12.500 millones. Ello determina que la economía argentina dependa crucialmente de la entrada de capitales (a pesar del «alivio» del Plan Brady la deuda externa de este año, de 78.200 millones de dólares, es la más elevada de la serie histórica) y si en algún momento esa financiación se contrajera o se cortara, se abriría una crisis de inflación y recesión. Esta creciente vulnerabilidad externa tiene lugar en un momento en que las tasas de interés internacionales suben y en que los mercados de capitales muestran mayor dureza.

También en 1994, consumido el efecto favorable de las privatizaciones -estos es, agotadas las «joyas de la abuela»-, el superávit fiscal corre el peligro de transformarse en un déficit. La caída de la recaudación, las rebajas impositivas concedidas a la burguesía industrial y agraria y los desajustes surgidos en el sistema previsional generaron un rojo en las cuentas del tercer trimestre y, fundamentalmente, proyectan serias dudas sobre las metas fiscales de 1995. A fin de anticiparse a los hechos, el ministro Cavallo anunció la ruptura del acuerdo con el FMI y el propósito de emitir Letras por 2.000 millones de pesos. Esto significa que el deterioro fiscal impulsará una mayor circulación de títulos públicos en un sistema financiero vastamente «dolarizado».

El ciclo expansivo después de la hiperinflación.

Para analizar la evolución de la economía en el período 1991-94, debe tomarse en cuenta tanto su comportamiento cíclico como su desarrollo a largo plazo. El plan de abril de 1991 logró consolidar una fase expansiva que se había iniciado unos meses atrás y que perdura aún a fines de 1994 aunque haya perdido su impulso y tienda a revertirse. En cuatro años consecutivos, el PBI global y el PBI manufacturero obtuvieron un crecimiento del 33% y del 31%, respectivamente. Por su parte, la acumulación del capital también experimentó un fuerte aumento, a pesar de que la relación inversión bruta fija/PBI recién en 1994 se acerca a los niveles de comienzos de la década del ochenta. Al apreciar la evolución de estas variables, se deben considerar dos importantes factores. Primero, ello tiene lugar a partir de los niveles sumamente deprimi-

dos registrados en 1990, tras una década de ajustes provocados por la crisis de la deuda externa y por la hiperinflación de 1989. Segundo, tal crecimiento se verificó en un contexto internacional muy favorable dado por el retorno de capitales a América Latina, lo que posibilita a la Argentina financiarse con endeudamiento del exterior.

Por otra parte, al inicio mismo de la convertibilidad (abril de 1991), el ministro Cavallo puso en marcha una reforma arancelaria que estableció condiciones inéditas de apertura. Las tarifas a la importación fueron drásticamente reducidas (el arancel promedio descendió de 17.3% a 9.7% entre 1990 y 1991) y se eliminaron las restricciones para arancelarias. Esta reforma obedecía a un doble propósito. En el corto plazo, el ingreso de importaciones con un arancel más bajo debía contribuir a reforzar la política de estabilización de precios. Pero, en una perspectiva de más largo plazo la mayor competencia externa debía obligar a los capitalistas a incrementar sus niveles de productividad -a través de inversiones, despidos y una mayor explotación de la fuerza de trabajo y reorganización de la producción- para hacer frente a las nuevas condiciones de una economía abierta al mercado mundial. Esta apertura se vio profundizada por el avance de la integración con Brasil, Paraguay y Uruguay a través del Mercosur.

En la Argentina, la combinación de aranceles bajos y atraso del tipo de cambio provocó importantes repercusiones sobre el tejido industrial. En primer lugar, el gran auge de las importaciones (pasaron de 4.077 millones de dólares en 1990 a 14.872 millones en 1992 y a estimativamente 21.300 millones en 1994) afectó a un conjunto de ramas manufactureras, entre ellas, la siderurgia, petroquímica, celulosa, textil y bienes de capital. En estas dos últimas, la secuela de cierre de plantas y el cese de líneas de producción tuvo las características de una verdadera «reconversión salvaje». En cambio, el impacto negativo fue mucho menor en aquellas ramas beneficiadas por una protección más elevada, ya sea oficial (automotriz), o comparativa (alimentos y bebidas) o que experimentaron un gran incremento en su demanda (electrónica de consumo).

En segundo lugar, el retraso cambiario determinó una distorsión de precios relativos en la economía. En efecto, a partir de abril de 1991 los precios del sector servicios (que se reflejan en la evolución del índice de precios al consumidor) se adelantaron en relación a los de la industria y del agro (que son medidos por el índice mayorista), cuyo crecimiento estaba limitado por un dólar fijo y por la competencia importadora. De esta forma, el plan de ajuste arrojó, desde sus inicios, incentivos favorables para las llamadas actividades no transables en desmedro de las transables productoras de exportaciones (manufactureras y agropecuarias). Como explica Astarita, esta distorsión dió lugar a una importantísima transferencia de plusvalía hacia los sectores monopólicos internos beneficiados con la privatización de los servicios públicos, y hacia

sectores improductivos vinculados con el comercio (3). En los primeros meses de la convertibilidad, el gobierno apostó ingenuamente a que las importaciones posibilitarían una deflación de precios y, por esta vía, una mejora del tipo de cambio real. Sin embargo, tal deflación no se produjo, el atraso se acentuó y empezó a surgir un pronunciado déficit de balanza comercial.

La imposibilidad de mejorar la tasa de ganancia en la industria a través de una devaluación determinó que el ministro Cavallo alentara una política de incrementar la productividad y de reducir costos a través de la desregulación (puertos, fletes marítimos, terrestres, aéreos, etc.). No obstante, este intento de bajar el «costo argentino» no ha tenido un impacto significativo sobre la industria y el agro. De allí que el gobierno haya debido apelar a medidas fiscales: el aumento de los reintegros a las exportaciones -esto es, la llamada «devaluación fiscal»- y la reducción de los aportes patronales para la industria y el agro. Estas medidas, además de resultar insuficientes para compensar el atraso cambiario, agravan la situación fiscal. No obstante, los problemas de rentabilidad en diversas ramas abren la perspectiva de que en 1995 se acentúen los reclamos de distintas fracciones burguesas por mayores subsidios.

Un punto de quiebre en el capitalismo industrial.

Las profundas modificaciones operadas en el sector industrial tuvieron impacto de distinto alcance.

1. La distorsión de precios relativos se reflejó en el ordenamiento de las inversiones reproductivas, destacándose el protagonismo del sector servicios. Tal es el caso de los monopolios de agua, gas, electricidad y, fundamentalmente, telefónico, registrando este último una gran participación en las importaciones de bienes de capital.

Dentro de la industria, la inversión bruta fija presenta un comportamiento diferenciado. Por un lado, en aquellas ramas que experimentan una mayor expansión -automotores, alimentos y bebidas y electrónica de consumo- se realizan importantes inversiones. En el caso de las terminales (Sevel, Ciadea y Autolatina) el proceso de reequipamiento cuenta con subsidio oficial (4). No puede sorprender, entonces, que los sectores automotriz y de alimentos y bebidas sean los que atraigan los mayores montos de inversión extranjera directa (IED). Según una reciente investigación sobre las inversiones imperialistas llevadas a cabo en la Argentina durante 1990-93 por un monto de 3.860 millones de dólares (que excluye las correspondientes a la privatización de empresas y de áreas petroleras), se advierte que la rama de alimentos y bebidas participa en un 19.5% del total invertido y la automotriz en un 14.3%. Por su lado, el sector minero, cuya explotación fue desregulada por el gobierno, lidera el ranking con un porcentaje del 28.8% (5).

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 90-93*

SECTOR	Nº DE PROYECTO %	MONTO (**)%
ALIMENTOS/BEBIDAS	22.7	19.5
SERVICIOS	17.3	3.7
AUTOPARTES/AUTOM.	10.0	14.3
MINERO	10.0	28.8
PAPEL	6.0	1.4
QUIMICA/PETROQUIMICA	5.3	1.4
TEXTIL	3.3	0.3
FARMACEUTICO	2.7	8.0
ALUMINIO	2.0	0.5
ELECTRONICA	2.0	0.1
MAQUINARIAS	2.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0
Nº de Proyectos (unid)		Monto (mill. de u\$s)
TOTAL	150	3.860,50
(*)Excluye las correspondientes a privatización de las empresas públicas		
(**)Estimado		
Fuente:elaboración en base a D.Chudnovsky, A López y F.Porta, (Pag.10)		

En cuanto al resto de las actividades industriales -entre ellas, petroquímica, siderurgia, celulosa, textil, máquinas-herramienta, etc.- el proceso de reequipamiento se lleva a cabo predominantemente en el contexto de una estrategia empresarial de tipo «defensiva» en la que se busca no tanto el aumento de la capacidad instalada (aunque en algunos casos así ocurra) sino el mejoramiento de los estándares productivos para hacer frente a las condiciones de menor protección arancelaria. Esta incorporación de bienes de equipo selectiva y de carácter capital-intensiva (poco absorbadora de empleo) se traduce, según Kosacoff, en mejoras de productividad que son significativas pero que tienden a agotarse en la medida en que no revisten la magnitud suficiente como para operar una reconversión en las nuevas condiciones de una mayor apertura (6).

En este contexto de cambios en el patrón productivo del capitalismo industrial, en que el Estado disminuye su rol como demandante de la producción como así también el monto de subsidios, se abrió un proceso de fusiones y absorciones con una gran participación del capital imperialista, de ventas de paquetes accionarios y de consolidación de varios grupos de la burguesía local mediante la compra de empresas privatizadas (Pérez Companc, Macri, Soldati, Techint, Fortabat, Roggio, entre otros). Estas tendencias, cuyo alcance todavía no ha sido apreciado en su totalidad pero que revisten pocos precedentes en la

historia del país, refuerzan el curso de concentración y centralización del capital abierto bajo la gestión Martínez de Hoz (7).

2. Durante la convertibilidad, se ha operado un importante aumento de la productividad industrial. La suspensión de la publicación por el INDEC, a partir de 1991, de las estadísticas de producción, ocupación y horas trabajadas obliga a acudir a mediciones privadas. De acuerdo a los datos estimados por CARTECO, entre marzo de 1991 y mayor de 1994, la relación producción manufacturera/horas-hombre trabajadas se incrementó en 42% (8).

La significativa evolución de esta variable debe ser evaluada considerando diversos aspectos. Primero, este incremento incorpora un considerable componente cíclico ya que se verifica a partir de niveles de capacidad ociosa muy altos provocados por la hiperinflación de 1989-90. Ello implica que difícilmente puedan obtenerse nuevos incrementos de significación si no está acompañado por un gran aumento de las inversiones. Por lo demás, la suba de la productividad está acompañada de un pequeño aumento de las horas trabajadas y sin un crecimiento de la ocupación.

En segundo lugar, reviste características diferenciadas por ramas y por empresas. En un conjunto reducido de plantas, la incorporación de mejoras tecnológicas y de equipamiento importado ha permitido un acercamiento a los niveles internacionales. En el resto de las empresas, los incrementos verificados obedecen a mejoras en la gestión, despidos de personal y, en general, a escasas inversiones.

En tercer lugar, según Frenkel, el aumento de la relación producto manufacturero/horas trabajadas debería ser cotejado con el encarecimiento en dólares que experimentó el costo salarial industrial durante el mismo período y que determina que el incremento neto alcance sólo al 24%. De esta forma se puede comprender cómo una evolución tan favorable de la productividad coexiste con una situación de competitividad signada por un déficit comercial superior a los 6.000 millones de dólares en 1994.

3. La estrategia de apertura con una paridad atrasada ha tenido un impacto negativo sobre un conjunto de actividades, tales como la textil, metalúrgica y de bienes de capital (9). Este último sector fue particularmente afectado por la fijación de un arancel cero para las importaciones de maquinarias (que es compensado con el pago de un reembolso sobre el equipo fabricado localmente). Un rasgo generalizado de la política industrial es que no procura aprovechar los acervos tecnológicos adquiridos sino aplicar una reforma estructural basada en la apertura de la economía. Según Jorge Katz, «resulta clara la gradual 'involución' de nuestras plantas fabriles hacia modelos de organización de la producción más cercanos a la 'maquila' o ensambles de componentes importados» (10)

Los cierres de plantas en el interior del país y la discontinuidad de líneas de producción en varias ramas determinan que los resultados de la reconversión sobre el conjunto de la industria sean inciertos y contradictorios. En un trabajo

que analiza el impacto que han tenido las experiencias de apertura en las ramas petroquímica y de máquinas- herramienta en Argentina, Brasil y México, se constata la actitud de las empresas a replegarse hacia productos maduros, a abandonar o postergar planes de expansión y a recortar las actividades tecnológicas. En otros términos, no se verifica la hipótesis «eficientista» que postula que la mayor competencia externa induce a los capitalistas a incrementar su actividad y su nivel técnico. Al mismo tiempo, aquellas acciones defensivas tomadas en el corto plazo influyen en sus posibilidades de acción futura, lo que implica que el paso del tiempo no es inocuo (11)

Otro rasgo de la actual etapa es que en 1993 y en 1994 se registraron importantes aumentos de las exportaciones manufactureras (MOI) y estos incrementos pueden repetirse en 1995 en razón del ciclo expansivo emprendido actualmente por la economía brasilera. Sin embargo, las importaciones crecieron a una tasa mucho mayor. Por otra parte, fuera del complejo automotriz que cuenta con un subsidio oficial, los únicos sectores que muestran un potencial exportador son los vinculados a los recursos naturales, en particular, el alimentario y el petrolero. Estas limitaciones abren una serie de interrogantes sobre el futuro cercano. ¿Tiene la evolución de las exportaciones en 1993-95 el carácter de una tendencia perdurable? ¿Se encuentra la burguesía argentina en condiciones de competir con la agresiva burguesía industrial brasilera? ¿Hasta qué punto la distorsión de precios relativos puede limitar su capacidad de invertir y exportar?

Los resultados de esta «reestructuración desarticulada» del sector industrial también deben ser evaluados en relación a los riesgos del corto plazo. La distorsión de precios relativos determina que una franja muy amplia de la burguesía -sobre todo, la pequeña y mediana- se desenvuelva en una situación de rentabilidad estrecha, encontrándose por lo tanto, muy expuesta al caso de la reversión del actual ciclo expansivo o de un deterioro del sistema financiero. En un informe reciente, se pone en evidencia el alto grado de endeudamiento de los capitalistas argentinos en relación a sus pares de Brasil, Chile y México. La relación pasivo total/patrimonio neto calculada por la Fundación Capital (12) para un conjunto de empresas que cotizan en bolsa asciende, en el segundo trimestre de 1994, al 97.5% en Argentina, al 73.7% en Brasil, al 66.6% en México y al 53.2% en Chile.

El salario real y la hiperinflación.

El año 1976 establece un quiebre histórico en el nivel y en la evolución del salario real en la Argentina. Entre principios de los cincuenta y mediados de los setenta se registra una leve tendencia ascendente en un contexto de crecimiento de la producción y del empleo (13).

El golpe militar de marzo de 1976 provoca una disminución drástica del ingreso real de los asalariados, abriendo un nuevo período histórico -en el cual se registran ciclos de recuperación muy limitados- que se extiende a nuestros días.

Dentro de este nuevo período, la política salarial del Plan Cavallo iniciado en 1991 se caracteriza por los siguientes rasgos: 1) el nivel del salario real se encuentra muy por debajo del vigente en la década del ochenta (salida de la dictadura militar y gobierno de Alfonsín) aunque es superior al pico sufrido durante la hiperinflación, 2) la actual erosión del salario tiene lugar en condiciones inéditas de desocupación y, además, sobre la memoria fresca de la hiperinflación. Uno y otro factor inciden negativamente sobre la capacidad de resistencia de los trabajadores y, 3) el atraso del tipo de cambio origina una distorsión en los precios relativos debido a la cual el salario real es muy bajo para los trabajadores pero, como se explicará más adelante, el costo salarial es muy elevado para los capitalistas.

Vayamos por parte. El siguiente cuadro sintetiza los datos del salario real calculados por Luis Beccaria (14). En la primer y segunda columnas se presenta el índice del salario privado urbano y del salario industrial (Secretaría de Seguridad Social) a partir de 1977 y en la tercera, el índice del salario horario normal del INDEC.

EVOLUCION DEL SALARIO REAL Ind. 1980 = 100

AÑOS	Privado urbano (1)	Ind.Manufacturera (2)	Horario normal (3)
Prom.70-75			117.3
1976			92.8
1977	80.8	79.1	81.9
1978	82.7	80.6	77.5
1979	90.9	90.3	89.6
1980	100.0	100.0	100.0
1981	91.8	92.6	93.8
1982	82.5	85.4	81.5
1983	98.5	102.0	101.1
1984	121.0	128.2	128.5
1985	104.9	11.1	112.8
1986	102.8	110.5	106.4
1987	93.8	100.1	98.2
1988	89.7	99.1	94.4
1989	70.1	87.6	81.5
1990	81.2	88.0	79.6
1991	74.2	82.0	75.5
1992	74.2	81.5	
(1) y (2): Encuesta de la Secretaría de Seguridad Social (3): INDEC Fuente: Elaborado en base a L. Beccaria, pag.126 y 127			

Los datos no dejan lugar a dudas. En primer lugar, el índice del salario privado urbano de 1992 registra el valor más bajo de la serie iniciada en 1977. En segundo término, el salario industrial exhibe una característica semejante, ya que es inferior a todos los registrados a partir de 1979, pero levemente superior a los verificados en 1977 y 1978. En particular, interesa destacar que para Beccaria el salario industrial de 1992 -cuyo nivel no ha experimentado variaciones significativas en 1993 y 1994- es un 36.4% inferior al de 1984 y un 18.5% más bajo que el de 1980. Por último, la serie del salario horario normal del INDEC que comienza en 1970 permite comprobar el quiebre operado en 1976 y el alcance transitorio de la recuperación alcanzada en 1984. Obsérvese que en 1991 (último dato disponible pero aún no publicado oficialmente) es un 35.6% inferior al del sexenio 1970-75.

Alfredo Monza, por su parte, define varios indicadores de salario y de costo salarial de la industria para el período 1980-93 (15), que se exponen en el siguiente cuadro:

COSTO LABORAL EN LA INDUSTRIA ARGENTINA en pesos y u\$s 1992.

AÑO	SalarioReal (pesos 1992)	CostoSalar. (pesos 1992)	Costo Salar. (u\$s1992)	Productividad (pesos 1992)	CostoSalar. Unit. (u\$s x unid.física)
1980	908.3	936.6	1466.0	2413.7	0.607
1981	811.5	728.9	922.4	2223.1	0.415
1982	726.1	515.8	427.2	2171.7	0.197
1983	939.4	645.5	508.3	2310.9	0.220
1984	1142.5	865.5	714.0	2279.8	0.313
1985	930.0	721.0	530.5	2050.5	0.259
1986	975.2	910.3	693.7	2344.1	0.296
1987	900.8	883.0	642.0	2321.3	0.277
1988	852.8	720.1	636.0	2194.9	0.290
1989	677.9	530.1	344.2	2106.4	0.163
1990	714.6	75605	696.1	2194.8	0.317
1991	660.4	883.7	887.4	2574.3	0.345
1992	697.7	1110.0	1119.7	2735.9	0.409
1993	724	1258.3	1247.1	2845.3	0.438

Fuentes: Elaborado en base a A. Monza, pág. 15

En la primer columna, el salario industrial exhibe en 1992 y 1993, a diferencia de los cálculos de Beccaria, una recuperación en relación al nivel de 1989, del 2.9% y del 6.9%, respectivamente. No obstante, ambas series coinciden en

que durante la convertibilidad el salario registra valores inferiores a los del período 1980-88.

En la segunda columna, Monza mide la evolución del costo salarial industrial (esto es, del salario y los impuestos patronales deflactados por los precios industriales). El valor correspondiente a 1993 es el más elevado de la serie, siendo un 137.4% superior al deprimido nivel de 1989. A su vez, el mismo costo salarial medido en dólares (salario e impuestos patronales deflactados por la evolución del tipo de cambio), que es un importante indicador de la competitividad exportadora, presenta una distorsión aún mayor. En particular, el costo salarial en dólares de 1993 es un 262.3% más elevado que el vigente en 1989.

En la cuarta columna, Monza incorpora una estimación de la productividad industrial con el fin de ponderar el costo salarial en términos de una variable física. Así resulta una nueva variable, el costo salarial unitario de la columna quinta. Aún teniendo en cuenta las mejoras de productividad, el costo salarial (unitario) medido en dólares de 1993 supera los valores de toda la serie (a excepción del verificado en 1980), siendo un 168.7% más elevado que el de 1989.

Como fuera señalado, este fenómeno de salarios bajos para los trabajadores y de salarios altos para los capitalistas genera condiciones adversas para la acumulación industrial. Puesto en otros términos, el nivel relativamente alto del capital variable (costo salarial) obstaculiza la apropiación de plusvalía por la burguesía industrial. Dadas las dificultades de reducir un salario nominal sumamente deprimido, los capitalistas optan por reclamar al gobierno la disminución de los impuestos laborales, el aumento de los subsidios a la exportación y la flexibilización laboral. Las dos primeras medidas generan complicaciones fiscales y la restante suprimiría un conjunto de conquistas laborales.

La desocupación en la Argentina.

Tradicionalmente, el capitalismo argentino se había distinguido del resto de los países de América Latina por sus relativamente bajas tasas de desempleo. El Plan Cavallo establece una ruptura también en este terreno. En 1994, la tasa de desocupación abierta (onda de mayo del INDEC) ascendió al 10.8% y la subocupación horaria, al 10.2%.

En varias zonas del país relevadas por la encuesta del INDEC, tales como Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca, la suma del desempleo y la subocupación supera el 25% de la población económicamente activa. Incluso, en algunas áreas industriales afectadas por las privatizaciones, tales como Villa Constitución-San Nicolás-Ramallo (no cubiertas por la encuesta oficial), aquella suma alcanza al 30% (16).

Debe destacarse, asimismo, que la metodología de encuesta del INDEC tiende a subestimar el verdadero nivel de la desocupación. Así, no son registrados como desempleados los ocupados con salarios de indigencia o los desocupados

desalentados que ya no buscan más trabajo. Para muchos especialistas, el avance de las condiciones de precariedad determina que el 40% de la población se encuentre en una situación laboral irregular (17).

En gran parte, la elevada desocupación -que se ha incrementado durante la fase expansiva del ciclo- es producto de los despidos asociados a la privatización de las empresas estatales y a la racionalización llevada a cabo por los grandes consorcios de la industria. Además, la política oficial de importaciones de bienes de capital con arancel cero provoca la reducción de la fuerza de trabajo empleada, acentúa un proceso de concentración al interior de la industria y provoca un cierre continuo de pequeñas y medianas empresas que continuará alimentando en el futuro el ejército de reserva.

La importancia que tienen aquellos factores para explicar el desempleo (entre los cuales debe incluirse la distorsión de precios relativos) tornan sumamente dudoso el argumento del gran capital de que la flexibilización laboral pueda ser un arma para disminuir la desocupación (18). Asimismo, el carácter estructural que está adquiriendo el desempleo industrial tenderá a provocar una reducción de aquella franja de trabajadores intermitentes (que entran y salen del mercado) y un incremento de la franja de desocupados de largo plazo, lo cual acentuará aún más las condiciones de marginalidad en la Argentina.

Las cuentas fiscales y las «joyas de la abuela».

En la segunda mitad de 1994, el gobierno se vio sacudido por la caída de la recaudación impositiva y la crisis previsional. Esta última se originó tanto en la privatización del sistema jubilatorio (que restó ingresos fiscales) como en la perspectiva de que el Poder Judicial reconociera deudas previsionales por un monto cercano a los 15.000 millones de dólares. Estos desajustes mostraron la precariedad de los resultados una vez consumido el dinero de las privatizaciones. Nadie puede dudar que a partir de este momento la «regla de oro» fiscal formulada por Domingo Cavallo, de que se debería obtener un superávit público sin privatizaciones de una magnitud suficiente para el pago de los intereses de la deuda, cayó irremisiblemente en el olvido.

En 1991, la salida de la hiperinflación se había operado a partir de un drástico ajuste fiscal, en el que tuvieron un papel decisivo dos medidas ejecutadas o por lo menos iniciadas en 1990, antes de la convertibilidad.

En primer lugar, la reforma monetaria de enero de 1990 (Plan Bonex) posibilitó la eliminación del déficit del Banco Central (déficit cuasi-fiscal). Esta reforma consistió en un canje forzoso de los depósitos bancarios por Bonex emitidos por el gobierno que acarrearón una fuerte pérdida a los depositantes ya que los títulos cotizaban a esa fecha al 40% de su valor nominal.

En segundo lugar, la privatización de las empresas estatales cumplió un rol crucial en el arreglo de las cuentas fiscales. En 1990 Menem había puesto en

marcha en un tiempo récord un vasto proceso de privatizaciones que comprendía los monopolios del transporte aéreo y ferroviario, teléfono, gas, agua, electricidad, petróleo, los puertos y varias empresas industriales (SOMISA, Petroquímica Río Tercero, Destilería San Lorenzo, Destilería Dock Sud, etc.). De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, entre 1990 y 1992, los ingresos en efectivo por ventas ascendieron a 5.438 millones de dólares, computándose además una reducción de la deuda externa por un valor nominal de 11.335 millones (19).

También debe señalarse que a partir de 1991, el descenso de la inflación, la recuperación de la actividad económica y un control de la evasión impositiva de alcance muy limitado habían contribuido a incrementar la recaudación tributaria. En su mayor parte, esta recaudación está compuesta por impuestos al consumo (IVA), que tienen un carácter regresivo (20). De esta forma, el gobierno pudo obtener importante superávits fiscales como se observa en el siguiente cuadro:

**SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO.
BASE CAJA SIN INTERESES (millones de pesos corrientes).**

	1990	1991	1992	1993	1994	1995*
SUPERAVIT PRIMARIO S/PRIVAT.	687	926	3133	5121	2300	-1080
PRIVATIZACIONES	309	2194	1787	523	673	-1550
SUPERAVIT PRIMARIO	995	3120	4920	5644	2974	470

* Estimado

Fuente: Secretaría de Programación Económica y CARTECO.

Estas cifras permiten comprobar la importancia de las privatizaciones al inicio del plan, ya que representaron entre el 237% (1991) y el 57% (1992) del superávit primario. Además, el superávit primario sin privatizaciones alcanza su nivel máximo en 1993 (5.121 millones de pesos) decaendo fuertemente en 1994 (2.300 millones). Por último, se advierte el agotamiento de las «joyas de la abuela» a partir de 1993, dado que el promedio de los ingresos por privatizaciones en 1993-94 representan 598 millones de pesos frente a un promedio de 1.991 millones en 1991-92.

La mayor vulnerabilidad del sector externo.

Como consecuencia de la sobrevaluación cambiaria y la apertura, el país registra el déficit de balanza comercial más abultado y prolongado de su historia. A pesar de la suba experimentada por las exportaciones, en 1994 el desequilibrio ascendería a 6.500 millones de dólares y contra lo que dicen las proyecciones rosa del gobierno, en 1995 registrará una magnitud similar (21). Además de compras de bienes de equipo y de insumo, las importaciones de este año incluyen estimativamente 4.600 millones de bienes de consumo -en una alta

proporción de carácter suntuario- y 1.200 millones por automóviles.

Por otra parte, el aumento de la inversión extranjera directa (IED) -motorizada por las privatizaciones- ha incrementado estructuralmente las salidas de divisas por utilidades y dividendos. De acuerdo a estimaciones oficiales, ascienden de 690 millones en 1993 a 1.082 millones en 1994, proyectándose una cifra de 1.599 millones en 1995. A partir de este año, las dos partidas del rubro servicios financieros de la balanza de pagos, esto es, los intereses de la deuda externa y las utilidades y dividendos de los monopolios multinacionales, tienen una magnitud similar (1.520 los primeros y, como se señaló, 1.599 millones los segundos) (22). Esta situación representa un cambio muy importante con respecto a lo ocurrido en la década del 80, cuando la extracción del excedente por el imperialismo tuvo lugar fundamentalmente a través del pago de intereses de la deuda. Entre 1982 y 1989, este rubro había significado entre el 80% y el 85% de los servicios financieros totales (23).

Como consecuencia del déficit comercial y de servicios reales y financieros, el desequilibrio de la cuenta corriente asciende en 1994 a 12.500 millones de dólares y requerirá una suma algo mayor en 1995. Tales necesidades de capital extranjero provocan un crecimiento de la deuda con el exterior.

¿Cuál es la magnitud de la deuda externa argentina?.

En estas condiciones, el gobierno ha vuelto a tender -a la usanza de Martínez de Hoz- un manto de confusión y de misterio sobre las cifras de la deuda externa argentina con la excusa de que la apertura financiera torna más difícil la contabilidad de la deuda privada. Incluso, mediante un ardid metodológico se pretendió desmentir las cifras calculadas por el ex-ministro Sourrouille, argumentando que el valor de la deuda externa pública de 1994 es de sólo 48.000 millones de dólares (24).

Este intento quedó sin asidero cuando, en setiembre de este año, la misión del FMI confirmó las cifras de Sourrouille en su informe reservado elevado a Washington que estimaba la deuda pública en 61.900 millones de dólares y la deuda externa total en 78.200 millones, esto es, la más elevada de la historia argentina a pesar de las privatizaciones (25)

DEUDA EXTERNA ARGENTINA. 1991-94. en millones de dólares.

	1991	1992	1993	1994
DEUDA TOTAL	64.5	61.1	68.1	78.2
DEUDA PUBLICA	59.8	54.8	60.4	61.9
DEUDA PRIVADA	4.7	6.3	7.7	16.3

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Las cifras del FMI aportan una información muy importante:

1. La deuda externa argentina de 1994, de 78.200 millones de dólares, es la más alta de su historia. Ello implica que la tan meneada receta del Banco Mundial de obtener un alivio vendiendo empresas públicas no le ha dado resultado al ministro Cavallo. En efecto, las capitalizaciones efectuadas por un valor de 11.335 millones de dólares ni siquiera han permitido reducir la deuda pública, cuyo valor en 1994 (61.900 millones) es también el más elevado de la serie.

2. Argentina entra en un nuevo ciclo de sobreendeudamiento motorizado sobre todo, pero no en forma exclusiva, por los capitalistas que obtienen plazos de pago más cortos que el gobierno. Por su lado, el ministro Cavallo empezó una afanosa búsqueda de fondos a partir del segundo semestre de 1994. Estableciendo la hipótesis conservadora de que el actual nivel del déficit de cuenta corriente no empeore, ello permite prever que en 1996 la deuda externa argentina superará los 100.000 millones de dólares. Para expresarlo en términos de Pierre Salama, la dinámica de la deuda se ha independizado nuevamente del crecimiento de la economía real (26).

Este ciclo tiene lugar en circunstancias en que los mercados internacionales se vuelven más duros y la tasa de interés se encuentra en alza. Más aún, el flujo de capitales de corto plazo, que habían ingresado en grandes proporciones hasta 1993, empieza a ceder. También las emisiones de obligaciones negociables han sufrido una fuerte merma (27)

Ello reduce el financiamiento de la balanza de pagos a dos fuentes principales. Por un lado, los fondos que pueda obtener el gobierno mediante la emisión de títulos de la deuda externa. La ruptura del acuerdo con el FMI, en octubre pasado, afectó su calificación como deudor, como quedó evidenciado en las declaraciones pesimistas del presidente del Citicorp, John Reed, en su reciente visita a Buenos Aires. Por el otro, el crédito bancario a las importaciones, que constituye hoy el principal canal de endeudamiento de los capitalistas, sufrirá un encarecimiento si se mantiene sin cambios. Lógicamente, una disminución de este flujo crediticio repercutirá sobre la situación de los capitalistas endeudados y, además, provocará una drástica contracción de las importaciones de maquinaria y de insumos intermedios.

La necesidad de un nuevo curso en la política argentina.

Ante la proximidad de las elecciones de mayo de 1995, en los partidos políticos se ha abierto un debate acerca de cómo afrontar los renovados problemas de la convertibilidad. Básicamente, pueden encontrarse tres respuestas principales. Una de ellas, la más afín al capital financiero y al FMI, está representada por el radical Ricardo López Murphy, quien propone fortalecer la política económica menemista, manteniendo la paridad del dólar y profundizando la terapia de shock. En particular, recomienda la reducción del gasto público, la extensión del ajuste fiscal a las provincias, una política monetaria dura y la flexibilización laboral.

En cambio, una segunda corriente manifiesta un marcado escepticismo respecto a la posibilidad de seguir adelante sin corregir el atraso cambiario. Tanto Roberto Frenkel como Eduardo Conessa, desde hace tiempo vienen anunciando a los capitalistas -sin que éstos parezcan darse por enterados- que las contradicciones del programa actual conducirán inevitablemente al empeoramiento del déficit comercial y a una crisis recesiva.

Finalmente, entre los economistas del sistema predomina la opinión sobre la conveniencia de seguir construyendo sobre la base de la «herencia de Cavallo», introduciendo los correctivos fiscales y crediticios que sean necesarios para preservar la estabilidad y la paridad del dólar y, en la medida de lo posible, lograr aumentos en el gasto social para atenuar la dureza del ajuste. En esta corriente se incluye el centroizquierdista Frente Grande del Chacho Alvarez, quien recientemente confesó frente a un auditorio de hombres de negocios su arrepentimiento por no haber votado en 1991 la ley de convertibilidad. La lógica de esta premisa de tratar de resolver las contradicciones del Plan Cavallo sin alterar su esencia ha sido expuesta con crudo realismo por los radicales Gerchunoff y Machinea en un seminario del Instituto Di Tella. «Es probable, sostienen estos autores, que algún día haya una crisis, cuando el desequilibrio externo se torne no financiable y/o cuando cambien otros factores exógenos que hoy juegan a nuestro favor. Pero lo que nosotros juzgamos verdaderamente relevante es que cuando ello ocurra nos encuentre mejor equipados que en el pasado, con el stock de capital físico y humano renovado. Apelar a una recesión intencionada o a una devaluación equivale a suicidarnos porque algún día vamos a morir» (28).

Como puede advertirse, cualquiera de estas propuestas -la conveniencia de introducir variantes en el Plan Cavallo o, en el caso de Frenkel y Conessa, la perspectiva de una crisis más o menos cercana- son completamente desfavorables para los trabajadores argentinos. Ninguna de esas posibilidades puede sorprender porque, como sostienen Bonnet y Glavich, la reestructuración actual es primaria y fundamentalmente una ofensiva contra los asalariados (29). Frente a esta situación extremadamente compleja, la izquierda aparece fragmentada, paralizada en disputas tacticistas y sin poder dar una respuesta que convoque a la sociedad, lo que entraña un retroceso frente a los logros parciales conseguidos en la segunda mitad de los años ochenta. Por ello mismo, en estas nuevas condiciones, se impone una tarea impostergable: replantear la elaboración y la discusión de un programa alternativo, relanzar las ideas antiimperialistas y socialistas e infundir confianza entre los explotados para poder imprimir un nuevo curso a la política argentina.

Buenos Aires, noviembre 1994

¹ Sobre el proceso de consolidación del bloque dominante, ver, Daniel Azpiazu, Eduardo M. Basualdo y Miguel Khavisse, *El nuevo poder económico en la Argentina de los ochenta*, Legasa, Buenos Aires, 1986; y Eduardo M. Basualdo y Miguel Khavisse, *El nuevo poder terrateniente*, Planeta, Buenos Aires, 1993.

² Esto no implica desconocer que la derrota sufrida por los trabajadores por el golpe militar de 1976 sea el factor explicativo más importante a largo plazo. Ver, Alberto Bonnet y Eduardo Glavich, *Reestructuración capitalista y régimen democrático* (Segunda Parte), Cuadernos del Sur, Número 17, mayo de 1994, pags. 13-33.

³ Rolando Astarita, *Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista*, Cuadernos del Sur, Número 16, octubre de 1993, pags. 45-50.

⁴ El régimen automotriz posibilita: 1) el aumento al 40% de autorización legal en los contenidos importados promedio por línea de cilindrada, 2) el acuerdo con las empresas terminales para importar vehículos y autopartes con un arancel muy reducido, que las empresas deben compensar con exportaciones y, 3) la posibilidad de computar las inversiones en capital fijo a fin de compensar las exportaciones comprometidas y no realizadas.

⁵ Daniel Chudnovsky, Andrés López y Fernando Porta, *La nueva inversión extranjera directa en la Argentina*, Documento de Trabajo, CENIT, Buenos Aires, 1994.

⁶ Bernardo Kosacoff, op. cit., pag. 75.

⁷ Daniel Azpiazu, *¿Hacia un nuevo modelo de acumulación?: la industria manufacturera ante la privatización y la asimétrica desregulación y apertura de la economía*, Cuadernos de Economía Política, Universidad de Luján, Primavera, 1993. Número 6, pag. 48; Eduardo M. Basualdo, El impacto económico y social de las privatizaciones, Realidad Económica No. 123, 1 de abril al 15 de mayo de 1994, pags. 27-52.

⁸ Roberto Frenkel, *La productividad tiene límites*, El Economista, 23 de setiembre de 1994.

⁹ Daniel Azpiazu, op. cit., pag. 49.

¹⁰ Jorge Katz, *Proyecto de desarrollo industrial de la República Argentina*, Realidad Económica No. 121, 1 de enero al 15 de febrero de 1994, pag. 73.

¹¹ Daniel Chudnovsky, Andrés López y Fernando Porta, *Industrias petroquímica y de máquinas herramientas: estrategias empresariales*, Revista de la Cepal 52, abril de 1994, pags. 49-70.

¹² Ver El Cronista Comercial, *Las empresas argentinas se endeudan más*, 28 de octubre de 1994.

¹³ Luis A. Beccaria, *Estancamiento y distribución del ingreso*, en Alberto Minujin (editor), *Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo*, UNICEF/LOSADA, Buenos Aires, 1993, pag. 124.

¹⁴ Luis A. Beccaria, op. cit., cuadro 1, pags. 126-127.

- ¹⁵ Alfredo Monza, *Costo laboral y competitividad*, Estudios del Trabajo Número 6, segundo semestre de 1993, pags. 3-21; en particular, cuadro 1, pag. 15.
- ¹⁶ Luis Beccaria y Aída Quintar, *Empleo, estructura productiva y posibles acciones en la zona de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución*, Instituto para el Desarrollo Industrial, UIA, Documento de trabajo No. 17, Junio de 1994.
- ¹⁷ Ver, reportaje a Alfredo Monza en Página 12, domingo 5 de junio de 1994.
- ¹⁸ Pablo Goldín y Ricardo Rozemberg, *La baja del costo laboral no elimina el desempleo*, Ambito Financiero, 19 de setiembre de 1994.
- ¹⁹ Eduardo M. Basualdo, *El impacto económico y social de las privatizaciones*, Realidad Económica No. 123, 1 de abril al 15 de mayo de 1994, pags. 28-31.
- ²⁰ Viviana Durán y Juan C. Gómez Sabaini, *Lecciones sobre reformas fiscales en Argentina: 1990-93*, CEPAL, Santiago de Chile, enero de 1994, pags. 6-44.
- ²¹ El gobierno calcula el déficit comercial de 1995 entre 2.343 y 4.365 millones de dólares. Ver, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, *Argentina en crecimiento 1994-96*, Tomo I, Proyecciones macroeconómicas y programa de inversiones, Buenos Aires, 1994, cuadros 1.8 bis y 1.10, pags. 42 y 44.
- ²² *ibídem*, cuadro 1.8 bis, pag. 42.
- ²³ Los cambios cíclicos en la forma de dominación del capital extranjero fueron analizados en Guillermo E. Gigliani, *La crisis externa argentina: ¿préstamos financieros o inversión directa?*, Realidad Económica No. 82, 3er. bimestre de 1988, pags. 60-74.
- ²⁴ El ex-ministro Sourrouille había estimado la deuda pública en 60.000 millones de dólares y la privada en 17.000 millones (Juan Sourrouille, *Tenemos deuda externa para rato*, Clarín, 1o. de setiembre de 1994). A las pocas semanas, el gobierno contestó que la deuda pública externa bruta «suma u\$s 48.000 millones y no u\$s 60.000 millones como se indica en el mencionado artículo», sin hacerse cargo, además, de una cifra de la deuda externa privada (No equivoquemos el rumbo, El Cronista Comercial, 13 de setiembre de 1994).
- ²⁵ Ambito Financiero, 29 de setiembre de 1994. Este diario publicó las partes sustanciales del informe secreto. Esta cifra coincide con la estimación del ex-ministro Juan Sourrouille publicada en Clarín (deuda privada de 17.000 millones de dólares).
- ²⁶ Pierre Salama. *La dolarización*, Siglo XXI, México, 1990.
- ²⁷ Carlos Rivas, *La Argentina ya no tienta a capitales especulativos*, Ambito Financiero, 26 de agosto de 1994.
- ²⁸ Pablo Gerchunoff y José Luis Machinea, *Un ensayo sobre la política económica después de la estabilización*, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, agosto de 1994. Una síntesis del documento fue publicada en El Economista, 9 de setiembre de 1994.
- ²⁹ Alberto Bonnet y Eduardo Glavich, *op. cit.*, pag. 28.